



8. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO GAGLIARDI

Creación de la Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas y Financieras durante la última dictadura militar

En 1976 se inició en nuestro país una dictadura cívico-militar que gobernó desde el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983. Esta no solo impuso el terrorismo de Estado, sino que desarrolló y planificó un proyecto dirigido a destruir toda forma de participación popular, a través de una represión sistemática y brutal sobre las fuerzas democráticas.

Claro que esto no se logró “en soledad”, sino que contó con el apoyo y contribución de distintos actores económicos y técnicos, que a su vez se vieron favorecidos por esta dictadura, cooperando con instrumentos de logística, económicos, políticos, técnicos etcétera. Ejemplo de estas empresas son: Loma Negra, Papel Prensa, Diario Nueva Provincia, Ingenio Ledesma, entre otras.

Estos grupos económicos externos e internos (“Cipayos”) que durante toda la historia de nuestro país optaron por favorecer intereses personales y de los poderes fácticos, sabiendo que a través del voto popular (democracia) nunca podrían llegar al poder, se apoyaron sobre su brazo armado (FFAA), interrumpiendo los sistemas democráticos en varias oportunidades desde 1930 hasta el comienzo del actual Estado institucional hace 32 años.

La revisión sobre los beneficios económicos obtenidos por todos estos actores lo demuestra. Y se sigue investigando sobre el enriquecimiento de los mismos a costa del perjuicio que ocasionaron a todos los ciudadanos trabajadores, obreros, profesionales, comerciantes del país.

Por tal motivo, es que considero de vital importancia el proyecto por el cual se instituye la formación de una Comisión Bicameral de identificación de las complicidades económicas y financieras durante la última dictadura militar, cuyo objetivo será no solo poner de relevancia las consecuencias que nos dejó la última dictadura a todos los argentinos sin distinción de clase, profesión o edad, sino, y sobre todo, identificar a los actores económicos que la respaldaron. Así, y mediante propuestas concretas, se impulsará la memoria, se señalará a los cómplices y se reforzarán las instituciones de la democracia.

Además, el proyecto contempla la creación en el Congreso del Archivo Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Su finalidad será poner a disposición del público los documentos utilizados por la Comisión para la elaboración de un informe.

Creo profundamente que este proyecto representa un avance hacia el esclarecimiento de la verdad; de la verdad de lo que ocurrió y que nos afectó a todos y a todas, ¡¡¡por la memoria, por la justicia y por la democracia!!!

He oído voces de la oposición que afirman que este proyecto “llega tarde” (Rogel Fabián - UCR) y que si se hubiera dado antes, habría permitido un debate sobre ciertos



Dirección de Información Parlamentaria

sectores de poder. Al respecto, considero que no es tarde, que nunca es tarde para proyectos de estas dimensiones, que siguen dando batalla a la institucionalidad como pilar de la democracia, que entienden que sin resolver el pasado es difícil construir un futuro firme y prometedor.

Por todo lo expuesto, anticipo mi voto afirmativo al presente proyecto de ley.

10. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO GARRIDO

Creación de la Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas y Financieras durante la Última Dictadura Militar

En el tratamiento del proyecto de ley que crea la Comisión Bicameral de Identificación de las complicidades económicas y financieras durante la última dictadura militar para la búsqueda de la verdad, la memoria, la justicia, la reparación y el fortalecimiento de las instituciones de la democracia, no tuve oportunidad de exponer algunas de mis observaciones.

Demás está decir que comparto esencialmente el objeto que desde la retórica los autores del texto exteriorizan. El proyecto de ley en cuestión implica un avance en términos de averiguación de la verdad y su espíritu se condice con la evolución de la doctrina en materia de justicia transicional, que reconoce la importancia de determinar las complicidades empresariales en la comisión de crímenes de lesa humanidad.

Sin embargo, tal como está planteado, el articulado no pareciera ser eficiente para el fin que intenta conseguir e incluso establece un objetivo tan amplio que trasciende la averiguación de la verdad respecto de los crímenes cometidos por la última dictadura cívico militar. Se genera así el riesgo de que la mentada comisión termine funcionando con una finalidad distinta a la que debería tener, alejándose de la construcción de la verdad y tornándose en una herramienta política o abriendo el espacio del Congreso para la imposición de determinados relatos parciales en lugar de reconstruir los hechos efectivamente ocurridos.

En primer lugar, el artículo 3° del dictamen establece que la comisión elaborará un informe sobre los aspectos más salientes y las consecuencias de las políticas económica, monetaria, industrial, comercial y financiera adoptadas por la última dictadura militar.

En él también deberán identificarse aquellos “actores económicos y técnicos que contribuyeron a y/o se beneficiaron con esa dictadura aportando apoyo económico, técnico, político, logístico o de otra naturaleza”.

La primera de las cuestiones se entiende pertinente para contextualizar históricamente el período en el que se cometieron múltiples delitos de lesa humanidad. Ahora bien, considerando que en la Argentina hubo grandes progresos en la determinación de responsabilidades penales por los delitos cometidos desde el Estado, es preciso avanzar en la determinación de las complicidades civiles en la comisión de esos delitos. Para esto, es necesario hacer referencia a los alcances del concepto de complicidad



Dirección de Información Parlamentaria

empresarial que se intenta delinear en el artículo 3°, pero que dada la amplitud de la redacción resulta arbitrario y poco útil.

Sobre el concepto de complicidad corporativa, el informe del Panel de Expertos Juristas de la Comisión Internacional de Juristas sobre Complicidad Empresarial en Crímenes Internacionales, “Complicidad empresarial y responsabilidad legal”, sostiene que para evitar que se le adjudique la responsabilidad penal o civil por violaciones a los derechos humanos las empresas tendrían que seguir las siguientes pautas: en primer lugar, si mediante esa conducta la empresa o sus empleados contribuyen a la comisión de violaciones específicas y manifiestas de los derechos humanos, ya sea mediante un acto o una omisión, y si, con independencia de cuál sea la forma de autoría, complicidad o instigación, la conducta habilita las violaciones específicas, es decir, que esas violaciones no hubiese ocurrido sin la contribución de la empresa; o exacerba las violaciones específicas, es decir, que la empresa empeora la situación, incluido el caso en que sin la contribución de la empresa algunas de esas violaciones hubieran sido de menor gravedad o menos frecuentes; o facilita las violaciones específicas, es decir, que la conducta de la empresa hace más fácil llevar a cabo las violaciones o cambia la forma en que se producen éstas, incluidos los métodos usados, el momento de la ocurrencia o el grado de eficacia.

En segundo lugar, si la empresa o sus empleados activamente desean habilitar, exacerbar o facilitar las violaciones manifiestas de los derechos humanos; o aunque no lo deseen, saben o deberían haber sabido a partir del conjunto de circunstancias que existía el riesgo de que su conducta contribuyera a la comisión de violaciones de los derechos humanos, o ignoran ese riesgo de manera voluntaria.

En tercer lugar, si la empresa o sus empleados tienen una relación próxima con el autor principal de las violaciones manifiestas de los derechos humanos o con las víctimas de las violaciones, bien debido a su proximidad geográfica, bien debido a la duración, frecuencia, intensidad o naturaleza de la relación, interacciones o transacciones correspondientes. Al respecto, cuanto más cercanos estén la empresa o sus empleados de las situaciones o a los sujetos involucrados, tanto más probable es que la conducta de la empresa dé lugar desde el punto de vista jurídico a responsabilidad legal por haber habilitado o exacerbado los abusos, y tanto más probable es que el derecho considere que la empresa conocía el riesgo o debería haberlo conocido.

En resumen, se establece una relación de causalidad entre el accionar de una empresa y la violación de derechos humanos no únicamente en aquellos casos en los que la empresa colabora directamente con la comisión de un delito, sino también cuando se beneficia de un contexto de violaciones a los derechos humanos aun cuando no busca con su accionar que esta situación tenga lugar. Ejemplos de ello son, entre otros, una empresa que se beneficie por la suspensión de derechos laborales y de asociación o una entidad financiera que aporte fondos que le permitan a un gobierno autoritario permanecer en el gobierno o llevar a cabo un delito de lesa humanidad.

En este sentido resulta imprescindible determinar que los responsables a los que apunta a identificar el informe en cuestión no deben solo haber obtenido beneficios o colaborado con las políticas económicas de un gobierno ilegítimo, sino que además deben haber prestado algún tipo de colaboración directa o indirecta en la comisión de crímenes de lesa humanidad. También es importante resaltar que hablamos de responsabilidad legal en términos amplios, es decir, tanto civil como penal. En



Dirección de Información Parlamentaria

particular, en materia civil es necesario alentar el debate respecto de la imprescriptibilidad de la responsabilidad civil por daños en relación con los crímenes de lesa humanidad .

En consideración de estos conceptos, no vemos reflejados en el artículo 3° del proyecto sancionado los avances de la doctrina internacional en materia de complicidad empresarial y mucho menos que se pretenda informar sobre la complicidad en delitos de lesa humanidad. Del modo en que está redactado el artículo parecería que el foco del informe será la colaboración o el beneficio económico de las empresas a causa de las políticas económicas del gobierno de facto, independientemente de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en ese período, cuya responsabilidad legal por parte de personas físicas también es necesario determinar. Es decir que el articulado de la ley puede frustrar el propósito aludido en la denominación, el espíritu y los fundamentos de la norma.

Luego, en el artículo 7° se faculta a la Comisión Bicameral a “solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo público nacional, provincial o municipal, y a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas”. Para este fin resulta inoponible a la comisión el secreto bancario, fiscal, bursátil o profesional hasta el 10 de diciembre de 1983. Sobre este aspecto cabe remarcar que con respecto al secreto profesional existen diversos alcances de acuerdo a la actividad de que se trate, ya que no son admisibles iguales excepciones para médicos que para contadores o para periodistas con respecto a sus fuentes, por ejemplo.

Especialmente preocupante nos resulta en esta línea el caso de los abogados cuya actividad queda amparada por un ámbito de reserva que impide que se los pueda someter a dar testimonio o denunciar aquellos hechos delictivos sobre los que tomen noticia en el ejercicio de la profesión .

Nuestro compromiso incuestionable con la averiguación de la verdad por los crímenes cometidos por la última dictadura cívico militar nos impulsa a echar luz sobre el que debería ser el objeto de esta comisión y los alcances de sus facultades, en miras a evitar posibles cuestionamientos a la licitud de su funcionamiento.